

Las injusticias de la justicia (III)

La otra verdad de los informantes

Esta semana EL MUNDO sigue con su serie "las injusticias de la justicia", donde con nombres propios, casos y vivencias, seguimos mostrando el drama humano de quienes se encuentran privados de la libertad en la Cárcel Nacional Bellavista.

OSCAR CASTAÑO VALENCIA

No es posible seguir manteniendo en las prisiones colombianas ciudadanos por "informes" no verificados. No se puede mantener la infamia, para complacer la sed de venganza de una sociedad mediocre, que crea "chivos expiatorios" que no conoce, para ocultar su incapacidad de generar una sociedad más equitativa y justa.

Cuando fui llevado a los calabozos de la Sijín, a principios del mes de diciembre, me llamó la atención encontrar a un grupo considerable de personas, mujeres y hombres, que habían sido capturados en el Municipio de Caldas por "información eficaz de la ciudadanía", según lo expresara en rueda de prensa el comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Carrillo, quien además afirmó que todas esas personas "eran parte de un grupo de milicias que operaba en la zona".

Tuve la oportunidad, durante varios días, de hablar con estas personas, quienes siempre afirmaron que no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley y que eran, en su gran mayoría, desempleados a quienes algún vecino les tenía rabia por "parcharse en la esquina". Luego fueron remitidos a la Cárcel de Máxima Seguridad de Bogotá y la Cárcel del Buen Pastor. Hoy todos, excepto uno que está aquí en Bellavista por vender marihuana, se encuentran en libertad al comprobarse que dichos informes eran falsos. Los medios de comunicación registraron el hecho, haciendo eco del boletín oficial, como "un duro golpe a la subversión y a los grupos de milicias que operan en el área Metropolitana", y los cargos que levantó la Fiscalía, con base en los "informes" fueron de rebelión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, asociación con fines terroristas, etc.

Las historias que me contaron, casi todas las personas detenidas en este operativo, tenían que ver con los disgustos de algunos vecinos que no estaban cómodos por las frecuentes reuniones que ellos realizaban en una esquina del barrio, y donde consumían uno que otro "bar-

rético", hecho por el cual habían sido acusados de pertenecer a un grupo armado, y la Policía Nacional había desplegado un enorme operativo, con medios de comunicación a bordo, para capturarlos. Al llegar a Bellavista me di a la tarea de averiguar la existencia de otros casos que pudieran revelar la utilización de "informantes", en actuaciones judiciales, que luego resultan ser testimonios falsos, y puedo afirmar que son muchísimos los que he encontrado. Sin ningún escrúpulo los cuerpos de inteligencia del Estado, y muchos fiscales, están privando de la libertad a personas con informaciones falsas que son pagadas con plata de los contribuyentes, a través de los Fondos Especiales de Seguridad.

La otra verdad

La Defensoría del Pueblo, en la publicación "Límites de la Fuerza Pública en la Persecución del Delito", dice que: "La función de los organismos de inteligencia es recolectar, confrontar y depurar información. Es necesario resaltar el hecho de que la simple compilación de datos no constituye el fin buscado por las actividades de inteligencia, pues se requiere depurar esa información mediante comparaciones y confirmaciones a fin de lograr un conocimiento exacto y veraz de la situación que se pretende controlar. Así mismo, debemos recordar que la labor de inteligencia es un instrumento de protección, y no un fin en sí misma". Como lo anotó la Corte Constitucional en su sentencia T325, que expresa textualmente: "Servicios de Inteligencia que clandestinamente pueden recibir información sobre la ciudadanía y que, además, pueden servirse de esa información para actuar, se está ante un poder que difícilmente otra institución del Estado puede contrarrestar". El doctor Pedro Juan Moreno en su Revista "La Otra Verdad", en la edición del mes de diciembre del 2004, publicó un extenso informe que tituló "El manantial inagota-

ble de los sapos", en el que cuestiona el manejo corrupto que altos oficiales de la Policía y funcionarios públicos, ordenadores de gasto, le dan a los dineros asignados a los gastos reservados con los cuales se pagan a los informantes. Cita la publicación el testimonio de un fiscal que manifestó que: "Se ha logrado establecer que, no en pocas ocasiones, los llamados informantes y testigos de cargos no son otra cosa que personas motivadas por intereses económicos, cuyos deseos vindictivos son reforzados por miembros de la fuerza pública, que los recogen y orientan a su amparo y, sin verificar la veracidad y circunstancialidad de la información, la difunden... para condenar se necesita tener la certeza y esta es imposible de obtener con pruebas que vienen ocultas".

Un caso de informes falsos

Lizardo Antonio Guisao, un desplazado que salió huyendo de la violencia en Urabá en 1994, casado, con cuatro hijos, y quien con su trabajo de sastre sostenía a su familia y su madre de 80 años. Por informes pagados, que incluso han sido desmentidos por parte de diferentes cuerpos de inteligencia, se encuentra desde hace ocho meses detenido aquí en Bellavista, sindicado del presunto delito de rebelión. A este hombre y a su familia, que les tocó sufrir las atrocidades de la guerra en una región, como Urabá, donde se han cometido innumerables atrocidades por parte de los actores armados, fruto de una confrontación que el gobierno se empeña en desmentir pero donde se entierran civiles con mucha frecuencia; que con mucho esfuerzo y sin ayuda estatal reconstruyó su vida, con las dificultades propias de una ciudad como Medellín, para ofrecerle un mejor futuro a sus dos hijas y sus dos hijos, todos en edades entre 10 y 14 años de edad, tratando de que sus hijos no repitan los horrores vivió el.

Con la autorización de Lizardo Antonio Guisao y su abogado, y para demostrar las enormes arbitrariedades en que incurren los cuerpos de inteligencia del Estado, arrojando fiscales y jueces a tomar decisiones no solo equivocadas, sino injustas, me permito divulgar este caso con sus detalles más relevantes. Detalles que ilustrarán a la opinión pública de la perversidad que encierra la utilización de informantes, a quienes no les importa el dolor que causan con tal de hacerse a unos pesos. Además, del cuestionamiento ético que encierra para una sociedad su implementación.

Los hechos

Por testimonios de Carlos* y Oladier*, quienes recibieron recompensas del fondo de gastos reservados, y un informe del DAS, se dice que Lizardo Antonio Guisao tiene registros en órdenes de batalla como responsable del mando de dos frentes de las Farc, responsables de massacres, atentados dinamiteros y tomas guerrilleras, entre los años 1995 a 1997, en la zona de Urabá.

Fechas para las cuales aparece que, según el informe de la Policía judicial No. 553-P2, "laboró en una sastrería ubicada en Medellín".

Además de lo anterior, según el informe 1664-BR-B2-KAR-DEX-258, emanado de la Primera División de la Cuarta Brigada, certifica que: "En sus archivos y kardex operacional no se encontraron anotaciones de inteligencia que vinculen a Lizardo Antonio Guisao, con algún grupo subversivo". También el informe de la Policía judicial No. 592-P2, informa a la Fiscalía 61 Seccional que "en el orden de batalla que reposa en los archivos de la Oficina de Información y Análisis del CTL, pertenecientes a los frentes que operan en Urabá, no reposa el nombre de Lizardo Antonio Guisao". Además, plantea el anterior informe, "se consultó en el Sistema del Ministerio del Interior sobre personas supuestamente integrantes de grupos alzados en armas y el nombre de Lizardo Antonio Guisao no aparece".

Por último, se tiene como prueba en el proceso el oficio No. 0500 DIVI-BR17-B2-

INT-252, emanado de la Décima Curia Brigada, indicando los nombres de miembros de las FARC, que operaron en el Municipio de Apartadó, sin que "ninguno correspondiera al nombre o alias de Lizardo Antonio Guisao".

Se pregunta extrañado el doctor Nicolás Darío Sánchez, abogado defensor del caso, "es completamente extraño que los organismos de inteligencia del Estado no tengan ninguna información sobre mi cliente, lo que pone de manifiesto lo mentiroso y distorsionado de lo expuesto por los denunciantes". Y pide en su apelación al Tribunal Superior de Medellín que: "se proceda a revocar la decisión tomada por la Fiscalía 61 Seccional, porque no se tuvo en cuenta la parte probatoria que, repito, desvirtúa completamente las temerarias afirmaciones dadas por los denunciantes a quienes de paso, se tienen que hacer investigar y sancionar penalmente por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada, fraude procesal y falso testimonio".

Lizardo Antonio que se encuentra en el Pato Quinto, recluso en el mismo pasillo donde me encuentro, es un hombre silencioso que permanece pensativo casi todo el tiempo, con un profundo amor por su familia y a quien le han destruido sus sueños y su alma. "Estoy totalmente destruido", me dijo esta semana, "tanto moral, como económicamente, para mis hijas esto es un caos, ahora van hasta perdiendo materias, cuando eran las mejores alumnas en sus centros educativos, y mi hija y esposa han tenido que salir a trabajar, cuando siempre respondí por mi familia con mi trabajo honesto. Llevo ocho meses de horror por causa de personas sin principios, cuyo único interés es la plata. Le pido a Dios poder salir pronto de aquí, y que la vida me permita recuperarme de esta pesadilla".

Consecuencias sociales

Una Fiscal amiga, que me visitó esta semana en Bellavista, que en poco tiempo se jubiló, me dijo, reflexionando sobre las injusticias que comete la justicia, que: "cada día que paso en este trabajo me pesa enormemente, la sociedad nos ha vuelto carceleros, lo que hace que cargue con enormes cargos de conciencia".

Desde el Gobierno Nacional se viene promoviendo, como uno de los elementos fundamentales de la seguridad democrática, que los civiles participen en las redes de informantes para acabar con la delincuencia. Pero cuáles son los costos sociales de la cantidad de heridas que se vienen abriendo por la información falsa que se da, y que conduce a resultados operacionales tan cuestionables, donde de paso se están destruyendo familias enteras, como la de Lizardo Antonio, sus hijos y esposa.

Las denuncias siguen. EL MUNDO continúa mostrando la realidad por dentro de una cárcel, un sitio donde nadie quiere ir.

QUESTIONAMIENTOS

¿Cuántos inocentes?

El pago de informantes, por parte de las autoridades, ha generado cualquier cantidad de cuestionamientos éticos, porque además de privar de la libertad a cientos de inocentes, con informaciones que resultan ser falsas, también se conocen investigaciones, publicadas por la Revista "La Otra Verdad", en las que se destaca la enorme corrupción con que son manejados los Fondos de Gastos reservados por parte de altos oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado, y funcionarios públicos, ordenadores del gasto.

El dinero mueve a muchas personas a dar informaciones falsas sobre inocentes.